



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del diputado Pablo Bustinduy, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **Proposición no de ley sobre la condena al golpe en Brasil** para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de Motivos

El pasado 31 de agosto se consumó en Brasil el proceso de censura (*impeachment*) iniciado cinco meses atrás, el 17 de abril. Se destituía así definitivamente a Dilma Rousseff de la Presidencia del Brasil, apuntalando en el cargo al hasta entonces presidente interino Michel Temer.

El Congreso brasileño se ha servido de una figura jurídica existente en el ordenamiento del país (la del *impeachment*), sobre la base de presuntas irregularidades presupuestarias no contenidas en los preceptos señalados por la ley y desdibujadas a lo largo de un proceso espurio y falto de garantías. La misma apertura del proceso se dio sobre la base de acusaciones para las que, a fecha de hoy, no se han procurado pruebas suficientes que acrediten la culpabilidad de Dilma Rousseff. El Congreso brasileño, pues, retorció los instrumentos a su alcance bajo pretextos políticos que buscaban subvertir los resultados electorales de 2014, cuando Dilma Rousseff fue elegida Presidenta de todos los brasileños y brasileñas con más de cincuenta millones de votos a su favor.

A diferencia de las democracias parlamentarias, en las cuales una moción de censura es suficiente para iniciar un proceso de inhabilitación del Jefe de Gobierno, en los regímenes presidencialistas -como es el caso brasileño- la figura del Jefe de Gobierno y Jefe de Estado coinciden, exigiéndose por tanto para su destitución la observancia no sólo de requisitos políticos (e.g.: pérdida del apoyo de la mayoría parlamentaria) sino también del cumplimiento estricto de los requisitos jurídicos, esto es, que hubiere existido prueba fehaciente de crimen de responsabilidad de la persona que ocupe el cargo de la Presidencia de la República.

Siendo cierto que la Presidenta Dilma perdió su mayoría parlamentaria, no es menos cierto que el juicio dejó patente que -desde el punto de vista penal- la materialidad del crimen de responsabilidad de la Presidenta no existió. Ninguna de las dos acusaciones imputadas a la Presidenta se sustentaron.

La primera acusación, «atraso en el pago de operación de créditos junto al Banco do Brasil en lo tocante a la ejecución del Plano Safra (Plan Cosecha) para el ejercicio de



2015», ya había sido desestimada por el parecer previo de la propia Fiscalía (hecho completamente ignorado por los senadores que propiciaron su impeachment), siendo ratificada esa versión por los testigos del juicio. Dicha operación de «crédito» no se configuraba como tal, tratándose -técnicamente- de una operación de ecualización de tipos de interés entre el Tesoro Nacional y el Banco do Brasil y, por lo tanto, no susceptible de considerarse delito bajo el ordenamiento penal.

La segunda acusación contra Dilma, la «apertura de 3 operaciones de crédito suplementarios sin previa autorización del Congreso Nacional», consagradas popularmente como «pedaladas fiscales», también quedó desestimada. Tanto la defensa de la Presidenta como los especialistas invitados en calidad de testigos explicaron que la autorización para la apertura de los créditos suplementarios estaba prevista por el ordenamiento jurídico y sus modalidades -rigurosamente respetadas por el Gobierno- registradas según LOA aprobada por el mismo Congreso. Por lo tanto, tampoco quedó en absoluto probado que la Presidenta desatendiera los preceptos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que es imposible sustentar la acusación de un supuesto delito de responsabilidad por parte de la Presidenta.

El Congreso de los Diputados entiende y proclama que en regímenes de carácter democrático los mandatos han de solicitarse y congraciarse mediante una única vía, que no es otra que la de las urnas; y por ello sostiene que las irregularidades patentes de este proceso (de las que se han hecho eco organizaciones regionales como la OEA y la UNASUR, y que han criticado con dureza la mayoría de gobiernos y parlamentos latinoamericanos) son condición suficiente para mostrar nuestra preocupación por los estándares democráticos más elementales, toda vez se ha torcido la voluntad inequívoca expresada en 2014 sin que haya mediado un nuevo proceso electoral.

Durante este período nuestro Gobierno en funciones no sólo no ha hecho uso de sus instrumentos diplomáticos para mostrar su consternación ante los graves hechos que se producían en el país amigo sino que, más bien al contrario, ha tomado de manera completamente deliberada la decisión unilateral y de marcado carácter político de reconocer al Gobierno de Michel Temer, toda vez ya se ha producido una reunión bilateral al más alto nivel durante la pasada cumbre del G-20 con nuestro Presidente en funciones Mariano Rajoy.

Durante todo el período de interinidad de Michel Temer y desde su nombramiento definitivo como Presidente de Brasil, el Congreso de los Diputados y la Comisión de Asuntos Exteriores no han sido informados de la situación y conformación de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, ni han sido consultados con el propósito de adecuar una respuesta común y consensuada. En definitiva: se han tomado decisiones políticas definitivas en materia de nuestra acción exterior que no han contado con el beneplácito o tan siquiera la consulta de esta Cámara.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente



Proposición no de ley

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Trasladar a las autoridades diplomáticas brasileñas acreditadas ante el Estado su profunda preocupación, repulsa y condena de la utilización de métodos antidemocráticos que han devenido en la destitución de Dilma Rousseff mediante un proceso de *impeachment* fraudulento, sin la disolución inmediata de las cámaras brasileñas ni la convocatoria de un nuevo proceso electoral.
2. Elevar a instancias europeas (Consejo de la Unión Europea y Consejo de Asuntos Exteriores) la posición recogida en el punto anterior (1.), demandando medidas diplomáticas ulteriores como, pero no únicamente, la no aceptación de la República del Brasil como interlocutor en las negociaciones comerciales con el Mercosur.
3. Reducir al mínimo los intercambios diplomáticos con la República del Brasil como medida de presión para la restauración de la legitimidad democrática de su Gobierno.”

Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.

Pablo Bustinduy Amador

Diputado y Portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores

Íñigo Errejón Galván

Portavoz del Grupo Parlamentario